



Consejo de Seguridad

Distr. general
18 de enero de 2012
Español
Original: inglés

Carta de fecha 17 de enero de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General

Como se recordará, durante el almuerzo del Consejo de Seguridad que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2011 señalé que me proponía enviar una misión a la región del Sahel para evaluar el alcance de la amenaza que supone la crisis de Libia para la región, así como la capacidad nacional, regional y, en mayor escala, internacional, para responder a esos desafíos. Indiqué asimismo que cuando recibiera el informe de la misión dispondría su presentación ante el Consejo. A ese respecto, tengo el honor de transmitirles el informe que la misión sometió a mi consideración al concluir sus trabajos.

Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta y el informe adjunto a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad.

(Firmado) BAN Ki-moon



Informe de la misión de evaluación de las repercusiones de la crisis de Libia en la región del Sahel

7 a 23 de diciembre de 2011

I. Introducción

1. Libia está ubicada en la parte nororiental del continente africano y es considerada un país tanto árabe como africano. Durante años, como resultado de su riqueza petrolera y el desarrollo de su infraestructura, así como de las políticas aplicadas de forma deliberada por el extinto líder libio, Muammar Al-Qadhafi, Libia se convirtió en un atractivo destino para muchos habitantes pobres del África subsahariana que abandonaron sus países, ya fuese a consecuencia de conflictos o por las difíciles condiciones de vida, y emigraron a Libia en busca de nuevos horizontes. Otros se incorporaron al ejército libio en calidad de oficiales permanentes y, según ha trascendido, como mercenarios, y supuestamente recibieron la ciudadanía libia. Se ha informado que algunas de esas personas fueron utilizadas por el aparato de seguridad del régimen para reprimir brutal y violentamente a la población durante la crisis y por tanto eran muy odiados por la población.

2. La crisis en Libia comenzó el 15 de febrero de 2011 con manifestaciones pacíficas, pero rápidamente se transformó en un conflicto interno cuando las protestas callejeras fueron reprimidas violentamente por el Gobierno. La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes, puso en marcha varias iniciativas diplomáticas en un intento por poner rápido término a la crisis. Esos esfuerzos resultaron infructuosos y no pudieron impedir la escalada de la crisis, que puso a Libia al borde de una catástrofe humanitaria, sobre todo en la parte oriental del país.

3. En esas circunstancias, el Consejo de Seguridad aprobó las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011) en las que, entre otras cosas, autorizó la adopción de “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil. Tras meses de intensos enfrentamientos, el régimen de Muammar Al-Qadhafi llegó a su fin con su muerte en Sirte el 20 de octubre de 2011.

4. Si bien las repercusiones de la crisis se sintieron en todo el mundo, los países vecinos de Libia, como Argelia, el Chad, Egipto, Malí, Mauritania, el Níger y Túnez, fueron los más afectados por los problemas resultantes de la crisis. En un período relativamente breve, los gobiernos de esos países, especialmente los de la región del Sahel, tuvieron que hacer frente a la afluencia de cientos de miles de repatriados traumatizados y empobrecidos, así como a la entrada de un número indeterminado y no cuantificable de armas y municiones del arsenal libio. Aunque el volumen de repatriados y las repercusiones de su regreso varían entre los distintos países, está claro que existe la posibilidad de que su afluencia agrave aún más una situación de por sí precaria e inestable. Por otra parte, esos países sufren la amenaza directa de una inminente crisis de la seguridad alimentaria y la nutrición que podría agudizar más y afectar negativamente la situación política, social y económica de la región.

II. Contexto

5. Cabe recordar que en el momento más álgido de la crisis libia la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Representante Especial del Secretario General para Libia, la Unión Africana, las organizaciones de derechos humanos y otros agentes plantearon su preocupación por el bienestar y el trato de los extranjeros en Libia, especialmente de los trabajadores migrantes del África subsahariana. Cabe recordar también que durante toda la crisis el Consejo de Seguridad y la Unión Africana mantuvieron criterios divergentes sobre la manera de resolver el conflicto.

6. La decisión del Secretario General de desplegar la primera misión de evaluación en la región, con la participación de la Unión Africana, tenía el propósito de transmitir el mensaje de que se debía ofrecer solidaridad a los que sufrían las consecuencias negativas de la crisis libia y enviar a la región una señal de que las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) apoyaban a las poblaciones afectadas del Sahel y que, pese a las diferencias pasadas, la naturaleza y complejidad de los desafíos que enfrentaba la región del Sahel exigían la cooperación de todos los asociados. Estos mensajes fueron bien recibidos en la región, pues todos los dirigentes acogieron favorablemente a la misión y proclamaron que con ella resurgía la esperanza de aplicar un enfoque regional de mayor colaboración dirigido a resolver los problemas que afectaban a la región.

III. Mandato

7. La misión recibió el mandato de reunir información sobre a) la llegada a esos países de repatriados desempleados, incluidos trabajadores migrantes, excombatientes de Libia y elementos armados de origen tuareg y toubou, así como sobre los efectos de su retorno en la estabilidad socioeconómica y política de las comunidades que los acogían; b) la entrada de armas en la región y la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras, misiles tierra-aire y explosivos; c) la naturaleza y el alcance de las actividades delictivas y terroristas en esos países y las iniciativas regionales emprendidas para hacerles frente; d) las repercusiones en el sector de la seguridad; e) la capacidad operacional nacional del sector de la seguridad; f) la reforma judicial; g) las medidas adicionales que cabía adoptar para abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria recurrente y la malnutrición, así como otras cuestiones humanitarias; h) el desempleo entre los jóvenes; e i) la evaluación de los riesgos de desastre. A la misión se le encomendó también que evaluara la capacidad de esos países en las esferas mencionadas y recomendaran medidas de aplicación inmediata y a largo plazo a nivel nacional y regional que las Naciones Unidas y la Unión Africana podrían adoptar para apoyar los esfuerzos que se venían desplegando en los planos nacional, subregional y regional y en la arena internacional para tratar de superar esos desafíos de una manera integrada y amplia.

IV. Composición

8. La misión interinstitucional de evaluación de las Naciones Unidas a la región del Sahel se desplegó bajo la dirección general del Representante Especial del

Secretario General para África Occidental, Sr. Saïd Djinnit. Estuvo encabezada por el Sr. Sam Basseby Ibok, Director Adjunto de la División de África II del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas, quien contó con la asistencia del Embajador Ki-Doulaye Corentin, representante de la Unión Africana en Yamena. La misión estuvo integrada por representantes del Departamento de Asuntos Políticos, el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre el Terrorismo, de la Unión Africana.

9. En el anexo I del presente informe figura una lista de todos los participantes. Lamentablemente, la decisión original de incorporar a la misión a representantes de la CEDEAO no se materializó, en gran medida debido a dificultades logísticas en la programación. No obstante, la misión aprovechó una extensa reunión celebrada en Abuja bajo la dirección de la CEDEAO

V. Organización de los trabajos

10. La misión realizó casi todos sus trabajos en grupo. Dado el tiempo limitado de que disponía el equipo y debido a dificultades logísticas, las consultas celebradas se limitaron fundamentalmente a las capitales de los cinco países visitados.

11. Antes de viajar a la región, el Representante Especial Sr. Djinnit, informó ampliamente a los participantes en la misión sobre los acontecimientos ocurridos en el Sahel. En cada una de las capitales visitadas, los miembros de la misión y los representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país correspondiente (salvo en Abuja) se reunieron con un amplio espectro de dirigentes políticos y militares nacionales, entre ellos, el Presidente de Malí, primeros ministros, ministros, parlamentarios y grupos de la sociedad civil, y celebraron consultas con grupos de trabajo técnicos interministeriales tanto temáticos como sectoriales. Asimismo, los miembros de la misión participaron en una reunión de dos días de representantes de la sociedad civil y gubernamentales y parlamentarios celebrada en Bamako los días 10 y 11 de diciembre de 2011 y organizada por el Parti pour la renaissance nationale para examinar el impacto de la crisis libia en la subregión sahelosahariana. Representantes de Argelia, Burkina Faso, el Chad, Mauritania, el Níger y el Senegal, participaron en los debates, que se centraron en las preocupaciones regionales sobre todos los aspectos de la crisis en el Sahel.

12. Al concluir las visitas, los representantes de la misión informaron de ellas al Representante Especial Sr. Djinnit y al Representante Especial y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA), Sr. Abou Moussa. En el anexo II del presente informe figuran el itinerario y la lista de interlocutores de la misión.

VI. Repercusiones de la crisis de Libia en la situación política, humanitaria, de seguridad y de desarrollo en los países afectados

13. Aunque las relaciones de Libia con sus vecinos no siempre fueron pacíficas, durante la década de los noventa el régimen de Qadhafi invirtió considerables sumas de dinero en la región del Sahel. Libia se convirtió en uno de los socios económicos más importantes del Chad y prestó apoyo sustancial y directo a las economías de Malí y el Níger, lo que contribuyó en parte al bienestar de la región. La economía libia también atrajo a trabajadores de la subregión, principalmente del Chad, Malí y el Níger y en menor medida, de Mauritania y Nigeria.

14. Un análisis general de los efectos de la crisis libia en la región del Sahel realizado en 2011 reveló que el alcance y el grado de repercusión diferían en dependencia de la ubicación geográfica y de los acuerdos políticos y económicos concertados con el régimen de Qadhafi. Reveló asimismo que la respuesta del sistema de las Naciones Unidas y sus asociados variaba en dependencia del número de repatriados, su capacidad sobre el terreno y los programas que se estuvieran llevando a cabo en las zonas afectadas por la crisis. Sin embargo, cabe señalar que muchos de los problemas que enfrenta la región del Sahel datan de antes del conflicto libio.

15. Si bien los acontecimientos ocurridos en Libia han afectado a los países de la región de distinta manera, se observan algunos factores uniformes y comunes en toda la región. Todos los países que comparten fronteras con Libia han experimentado una afluencia de repatriados que ha presionado sus estructuras sociales. En algunos países que no tienen fronteras con Libia, en particular Malí y Mauritania, también se ha registrado la llegada de repatriados. Aunque los repatriados son en su mayoría hombres, las mujeres y los niños que viven en las comunidades de acogida son especialmente vulnerables, pero a menudo no se les tiene en cuenta. Las mujeres enfrentan muchas limitaciones para conseguir empleo, obtener acceso a los alimentos y ganarse la vida en actividades agrícolas.

16. La crisis también ha afectado negativamente a esos países desde un punto de vista humanitario, sobre todo a la luz de la inminente crisis de la seguridad alimentaria y la nutrición. Los efectos combinados de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la ocurrencia de desastres naturales como sequías e inundaciones, el crecimiento demográfico, las epidemias (de malaria, cólera, meningitis, sarampión y poliomielitis) y los conflictos violentos, a los que se suman el acceso limitado a los servicios sociales básicos y las instituciones estatales deficientes, han exacerbado la vulnerabilidad de las comunidades del Sahel y aumentado su dependencia de la ayuda humanitaria. Los ciclos crónicos de crisis alimentarias y de nutrición han debilitado la capacidad de adaptación de las familias y sus mecanismos de supervivencia. Debido a la escasez de lluvias, principalmente en la franja del Sahel, es muy probable que la cosecha de 2012 sea peor que las de años anteriores. Ello agravará los niveles actuales de inseguridad alimentaria y malnutrición. Las familias tendrán que soportar la carga que supone una mayor inseguridad alimentaria y la disminución de las remesas como fuente de ingresos.

17. Incluso aunque no se declarara una crisis de la seguridad alimentaria y la nutrición, las necesidades humanitarias de la región son enormes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente 2,3 millones de

niños menores de 5 años mueren cada año en el África occidental y central. Más de una tercera parte de esas muertes se debe a la malnutrición. En 2010, casi 10 millones de personas en el Sahel enfrentaron una grave crisis alimentaria y 859.000 niños menores de 5 años tuvieron que recibir tratamiento por malnutrición aguda grave. El Comité Permanente entre Organismos en su instancia regional en Dakar formuló una estrategia regional dirigida a reforzar el vínculo entre la asistencia humanitaria, la recuperación y el desarrollo a largo plazo para romper así el ciclo de crisis recurrentes y ofrecer soluciones sostenibles a las poblaciones afectadas.

A. Cuestiones humanitarias y de desarrollo

Repercusiones sobre los repatriados

18. Al 15 de diciembre de 2011, la OIM había registrado 209.030 repatriados de Libia, entre los que se contaban 95.760 en el Níger, 82.433 en el Chad, 11.230 en Malí, y 780 en Mauritania. Estas cifras no incluyen, sin embargo, a los repatriados que cruzaron las fronteras sin ayuda de la OIM. Según estimaciones de los gobiernos, el número total de repatriados, incluidos los no registrados, asciende aproximadamente a 420.000, de los cuales 200.000 se encuentran en el Níger, 150.000 en el Chad, 30.000 en Malí y 40.000 en Mauritania.

19. Los estudios independientes realizados por la OIM en el Chad, el Níger y Malí indicaron que más del 95% de los repatriados de Libia eran hombres, que en su mayoría tenían entre 20 y 40 años de edad y muy bajo nivel educacional. Ellos se desempeñaban como trabajadores manuales poco calificados en los sectores agrícola, petrolero, de construcción y de servicios.

20. Cabe mencionar que antes del conflicto había un número importante de repatriados que residían en Libia desde hacía más de diez años, y que algunos habían nacido y se habían criado allí y nunca habían ido a sus países de origen. La mayoría de los repatriados perdieron sus ahorros y bienes y abandonaron Libia en circunstancias extremadamente difíciles. En algunos casos, resultaron víctimas de extorsiones y violaciones de los derechos humanos durante el viaje. Además del trauma psicosocial sufrido por los repatriados, los sentimientos de vergüenza y bochorno causados por la pérdida de su capacidad de ganarse la vida y mantener a sus familias obstaculizaron más su reintegración y estabilización socioeconómica.

Repercusiones en las comunidades de acogida

21. La mayoría de los repatriados provienen de las comunidades más empobrecidas y subdesarrolladas de la región. Su regreso ha representado una carga adicional para las comunidades pobres que los acogen y que ya enfrentan dificultades constantes como las frecuentes malas cosechas y experiencias agrícolas negativas, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la falta de oportunidades económicas, la infraestructura de salud y los servicios educacionales insuficientes y la exclusión social. En algunas regiones, las comunidades de acogida enfrentan riesgos de conflicto, delincuencia y violencia.

22. La migración de mano de obra hacia Libia había sido una de las principales estrategias de supervivencia de esas comunidades de acogida. Las remesas que los repatriados solían enviar contribuían mucho al desarrollo de las comunidades y constituían un medio de subsistencia en momentos de crisis. La OIM estima que,

como promedio, cada repatriado mantenía a más de siete personas en su país de origen. La pérdida de las remesas resulta particularmente impactante ante la crisis de seguridad alimentaria y nutrición que se avecina. El regreso de los repatriados entraña además una carga adicional para sus familias, sobre todo en países como el Chad, donde las comunidades de acogida ya compartían recursos con los refugiados y desplazados internos.

Repercusiones en materia de acceso con fines humanitarios

23. La región sahelosahariana se extiende por más de 8.000.000 km², lo que representa una cuarta parte de la superficie del continente africano. El acceso a la asistencia humanitaria en ese vasto territorio tropieza con grandes dificultades ambientales y geográficas. Además, el estilo de vida nómada de sus habitantes exige adaptar las intervenciones humanitarias de manera específica.

24. El deterioro de la situación de seguridad en el Sahel ha afectado negativamente la capacidad de las Naciones Unidas y sus asociados en la labor humanitaria para acceder a las poblaciones afectadas y llevar a cabo sus operaciones. Debido a esas circunstancias, suspendieron sus programas de vacunación, nutrición y otro tipo de apoyo a las comunidades más vulnerables. Si bien las autoridades proporcionan escoltas armadas para las operaciones humanitarias en Malí y el Níger, con mucha frecuencia se recurre al Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas para acceder a las comunidades del Chad y el Níger. Se informó a la misión que se estaban agotando los fondos necesarios para las operaciones del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, lo que pondría en peligro las operaciones humanitarias planificadas. Se comunicó también a la misión que en algunas zonas la organización Al-Qaida en el Magreb Islámico y diversos elementos delictivos estaban supliendo la carencia de asistencia humanitaria y, según se ha informado, estaban prestando servicios y asistencia humanitaria en zonas remotas en las que había poca o ninguna presencia del Estado. Esta situación puede ayudar a Al-Qaida en el Magreb Islámico a crear redes de reclutamiento y apoyo local dedicadas a reunir información, suministrar armas y municiones y prestar otro tipo de apoyo logístico.

Repercusiones en la economía local e implicaciones presupuestarias y fiscales

25. La crisis de Libia ha tenido un impacto negativo en la industria turística de la región. El temor al secuestro y otros problemas de seguridad han disuadido a los turistas de visitar determinados países. Esta situación ha afectado adversamente a las economías locales, en particular a las pequeñas empresas. La suspensión de inversiones en países como Malí ha generado más desempleo. La crisis también ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos como resultado de los elevados gastos de transporte de las mercancías que hay que transportar de puertos más alejados.

26. En el Níger, los gastos de defensa han aumentado en un 65% mientras que el presupuesto para servicios sociales (educación, salud, etc.) se ha reducido considerablemente. En Mauritania, se informó a la misión que la mayoría de los repatriados se habían reintegrado a sus familias de origen o se habían asimilado gracias a la solidaridad social. Aunque grupos de repatriados organizaron protestas frecuentes (en demanda de empleos o más asistencia) durante los primeros meses después de su regreso, las tensiones parecían haberse aliviado gracias a las promesas relativas a la reintegración hechas por los gobiernos.

Riesgos de desastre y cambio climático

27. Los países de la región del Sahel sufren debilidades endémicas debido a que son susceptibles a múltiples vulnerabilidades políticas y socioeconómicas y peligros naturales. En los últimos tiempos, los procesos asociados a la variabilidad del clima y al cambio climático (que tienen efectos a corto y largo plazo) han aumentado la frecuencia, magnitud y propagación de los desastres naturales, especialmente sequías e inundaciones, cuyos efectos han sido más pronunciados. Además de la sobreexplotación de los recursos naturales por los seres humanos, los modelos indican que el cambio climático está activando ciclos de sequía que propician la inseguridad alimentaria y, por consiguiente, la inestabilidad social.

Respuestas nacionales

28. En relación con los repatriados, las actividades humanitarias se han centrado en proporcionarles asistencia para la evacuación y el transporte en condiciones seguras y dignas, que incluyen alojamiento temporal, alimentos y atención de la salud. Los gobiernos de la región, en cooperación con la OIM y otros asociados en la labor humanitaria, han adoptado las medidas necesarias para facilitar el regreso de sus ciudadanos y han cooperado para proteger y prestar ayuda a los nacionales de terceros países que atraviesan sus territorios. Algunos de los gobiernos y organizaciones internacionales están planeando o ejecutando programas de reinserción y reintegración dirigidos a facilitar la integración de los repatriados en las etapas iniciales. No obstante, en varias reuniones celebradas por la misión se destacó la necesidad de realizar esfuerzos más amplios en lo que respecta a la planificación, dotación de recursos y ejecución.

29. En relación con la crisis de la seguridad alimentaria y la nutrición, los gobiernos del Chad, Malí, Mauritania y el Níger ya han declarado una crisis nacional y han solicitado asistencia internacional para hacer frente al empeoramiento de la situación. Al mismo tiempo, los gobiernos han elaborado planes de respuesta y han empezado a realizar las actividades pertinentes.

Respuestas regionales

30. En marzo de 2011 la CEDEAO desplegó una misión de constatación de los hechos en Egipto y Túnez para evaluar la situación de los ciudadanos del África occidental que habían huido de la crisis en Libia. Posteriormente, la CEDEAO preparó un proyecto para ayudar a los migrantes de la región a regresar a sus hogares. El proyecto, valorado en un costo total de 4 millones de dólares de los Estados Unidos, aún no se ha ejecutado. La CEDEAO también está en vías de adoptar una nueva política de asistencia humanitaria y ha elaborado un plan de acción humanitaria conexo, que se propone aprobar en marzo de 2012. De esa manera las organizaciones regionales podrán prestar asistencia a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer frente a la inseguridad alimentaria y la malnutrición y mitigar los efectos de la crisis libia.

Recomendaciones

31. A continuación se relacionan las medidas de aplicación inmediata y a largo plazo que se recomiendan.

De aplicación inmediata:

a) En el nivel nacional

- La comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos que vienen desplegando los gobiernos de la región y la OIM para asegurar el regreso de los migrantes en condiciones seguras y dignas, facilitar la reinserción inmediata de los repatriados y prestar asistencia a las comunidades de acogida afectadas;
- La comunidad internacional, incluida la CEDEAO, debe apoyar más a los asociados en la labor humanitaria para reforzar las actividades de preparación ante la posibilidad de deterioro y crisis de la seguridad alimentaria y la nutrición. Es imprescindible que haya capacidad y se disponga de recursos de asistencia humanitaria suficientes para apoyar una respuesta en gran escala en el marco de la estrategia regional de preparación para casos de crisis alimentaria en el Sahel y los países vecinos afectados, formulada por el Comité Permanente entre Organismos a nivel regional para coordinar la asistencia humanitaria desde su sede en Dakar;
- Los sistemas de las Naciones Unidas y sistemas de seguridad conexos en la región deben fortalecerse. Además, los gobiernos tienen que facilitar el acceso permanente de los agentes humanitarios a las zonas afectadas. Es necesario también fortalecer la colaboración con los donantes para asegurar el apoyo sostenido y ampliado al Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, cuyos vuelos siguen siendo el único medio de atenuar las dificultades relacionadas con el acceso en la mayoría de los países afectados. Tomando como base las evaluaciones regionales, deben ampliarse los vuelos del Servicio en la región para lograr que la asistencia humanitaria llegue a las comunidades más vulnerables;
- El sistema de las Naciones Unidas, los asociados para el desarrollo y las organizaciones internacionales pertinentes deben apoyar las iniciativas multisectoriales de reintegración de los gobiernos. Sus estrategias deben prestar particular atención a la prevención de conflictos, la cohesión social y la protección, así como a la prestación de apoyo a los medios de vida de los repatriados de Libia y las familias de acogida, aparte de las actividades agropastorales y generadoras de ingresos tradicionales. La prestación de asistencia debe beneficiar también a los repatriados que no sean productores agropecuarios. Las actividades de prestación de asistencia establecidas, incluidas las de protección, deben complementarse con iniciativas de prevención de conflictos que se centren en las fuentes de tensión entre las comunidades de acogida y los migrantes en los centros de tránsito y recepción y en las comunidades de repatriados. A corto y mediano plazo será fundamental realizar intervenciones dirigidas a la prevención de crisis y la recuperación en las comunidades de origen de los repatriados. Asimismo, es esencial que se promueva y fortalezca el papel de la mujer en el desarrollo de las comunidades;

- Una vía rápida y eficaz para contribuir a la recuperación económica y el empleo de los jóvenes en la región del Sahel consiste en crear programas de infraestructura que generen muchos puestos de trabajo e incorporen el desarrollo en situaciones de conflicto y la consolidación de la paz. Esos programas deben tener en cuenta las características específicas de los repatriados y las competencias que adquirieron durante su estancia en Libia.

b) En el nivel regional

- Debe preverse la creación de una plataforma subregional que aborde las cuestiones humanitarias y socioeconómicas y las relativas a la seguridad, la delincuencia transfronteriza y el desarrollo. Debe fomentarse el diálogo entre los Estados para resolver la situación de los tuareg y apoyar las iniciativas de reconciliación transfronterizas.

c) En el nivel internacional

- Debe abogarse por la protección de los derechos humanos de los migrantes en Libia, incluidos los derechos a la seguridad personal, el bienestar, el trabajo, el acceso a la justicia y la propiedad individual.

De aplicación a largo plazo:

- Debe aplicarse un enfoque regional para abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria recurrente y la malnutrición en el Sahel, que vincule de manera efectiva las iniciativas humanitarias y de desarrollo con miras a lograr soluciones sostenibles. Debe realizarse un análisis de los medios de vida y debe prestarse especial atención a los dividendos que produzcan la estabilización y la recuperación;
- Debe fortalecerse el marco institucional, normativo y de gobernanza de los países de la región para asegurar que en sus planes, políticas y programas de desarrollo se tomen en consideración los efectos del cambio climático a fin de promover el desarrollo sostenible; deben llevarse a cabo evaluaciones de los riesgos climáticos y de desastre a fin de elaborar perfiles de países y regiones tanto a corto como largo plazo y formular medidas de reducción de riesgos de alcance interinstitucional a nivel regional, con la participación activa y efectiva de las mujeres;
- Los programas deben centrarse cada vez más en el nexo entre paz, seguridad y desarrollo, con miras a fortalecer la democracia, promover la paz y fomentar el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible. A más largo plazo, las intervenciones dirigidas a prevenir conflictos y fomentar la cohesión social deben abordar también los problemas relativos a la seguridad de las comunidades y el acceso a la justicia, especialmente dado el estado deficiente de las estructuras de aplicación de la ley en las zonas a las que regresan los repatriados;
- La Unión Africana, los gobiernos de la región y las organizaciones internacionales competentes deben facilitar el establecimiento de mecanismos de migración de la fuerza de trabajo entre los países de la región y fuera de esta con objeto de promover la migración temporal, el desarrollo y los programas de reasentamiento. La incorporación a esos mecanismos debe ser

voluntaria y debe asegurar la protección en todo momento de las personas que se acojan a ellos.

B. Cuestiones de seguridad

Proliferación de armas

32. La crisis en Libia exacerbó aún más una situación de seguridad que ya era precaria en la región del Sahel. Los gobiernos de los países visitados señalaron que, pese a los esfuerzos por controlar sus fronteras, ingresaban como contrabando en la región del Sahel grandes cantidades de armas y municiones procedentes de los arsenales libios. Según funcionarios nacionales y expertos internacionales, estas incluían granadas propulsadas por cohetes, ametralladoras con visores antiaéreos, fusiles automáticos, municiones, granadas, explosivos (semtex) y artillería antiaérea ligera (de calibre ligero y doble cañón) montada sobre vehículos. Señalaron que era posible que se transfirieran a la región armas más avanzadas, como misiles superficie-aire y sistemas portátiles de defensa antiaérea, pero no proporcionaron pruebas de su existencia o su recuperación.

33. Determinadas autoridades señalaron que algunas de estas armas habían sido ingresadas al Sahel de contrabando por personas que regresaban, en particular excombatientes que habían sido miembros del ejército libio o mercenarios durante el conflicto. Es posible que algunas de las armas estén escondidas en el desierto y sean vendidas a grupos terroristas como Al-Qaida en el Magreb Islámico, Boko Haram u otras organizaciones delictivas. También señalaron que había aumentado el comercio de armas en algunos países de África occidental.

34. Los funcionarios de algunos de los países visitados, en particular el Chad, Mauritania y el Níger, declararon que habían tenido cierto éxito en la limitación del ingreso de armas en sus territorios como resultado de la aplicación de estrictas medidas de seguridad desde el comienzo de la crisis en Libia, entre otras cosas el despliegue de efectivos adicionales en lugares estratégicos a lo largo de sus fronteras. Por ejemplo, el ejército y las fuerzas de seguridad del Níger lograron capturar armas, municiones y explosivos (semtex) que supuestamente habían tenido su origen en los arsenales libios durante enfrentamientos con algunos combatientes que regresaban, traficantes de armas y terroristas pertenecientes a Al-Qaida en el Magreb Islámico.

35. En el caso de Malí, diversos representantes del Gobierno informaron a la misión que mantenían un diálogo con los repatriados armados, en particular los tuareg malienses, a fin de alentarlos a entregar voluntariamente sus armas.

36. Todos los interlocutores nacionales e internacionales pusieron de relieve la necesidad de elaborar mejores enfoques regionales coordinados para enfrentar la transferencia ilegal de armas a través de las fronteras y evitar que se utilizaran para instigar la violencia armada en el Sahel o para dar impulso a antiguas rebeliones en el Níger y Malí.

Amenazas terroristas

37. Las actividades terroristas y delictivas en la región del Sahel han aumentado recientemente. Estas incluyeron secuestros de occidentales para cobrar rescates y enfrentamientos armados con la fuerzas de seguridad. Generan cada vez más

preocupación la posibilidad de que grupos terroristas o delictivos recluten a jóvenes y repatriados desocupados, en particular, así como el creciente riesgo de radicalización.

38. Desde 2003, 53 personas fueron tomadas rehenes por grupos terroristas en el Sahel, como el anterior Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), actualmente denominado Al-Qaida en el Magreb Islámico. Esta organización tradicionalmente ha funcionado principalmente en el norte del Sahel, pero en los últimos tiempos ha ampliado sus operaciones a otras partes de la región, como lo demuestra el secuestro de dos ciudadanos franceses en Niamey a principios de 2011 y los secuestros realizados recientemente en las regiones de Hombori y Tombuctú, en Malí. Diversos funcionarios informaron a los representantes de la misión que podía existir cierto nivel de cooperación en algunos ámbitos entre traficantes de drogas y miembros de Al-Qaida en el Magreb Islámico, en particular en relación con el cobro de impuestos ilegales en determinadas zonas de Malí.

39. Pese a la aparente colaboración entre los diversos grupos, algunos funcionarios pusieron de relieve la tensión existente entre Al-Qaida en el Magreb Islámico y los grupos tuareg en determinadas zonas. Mencionaron el anuncio formulado por el portavoz del Movimiento Nacional para la Liberación de Azaouad el 19 de diciembre 2011, en el que señaló que su grupo tenía intenciones de expulsar de su territorio a los miembros de Al-Qaida en el Magreb Islámico. El portavoz afirmó que toda asociación con esa organización perjudicaría la reputación de su grupo e impediría el desarrollo de su territorio, y que su grupo estaba dispuesto a combatir contra Al-Qaida en el Magreb Islámico si se le proporcionaba apoyo político y financiero.

40. Recientemente, ha habido una proliferación de grupos terroristas en la región. Esto incluyó el anuncio formulado por Iyad Ag Ghali, uno de los líderes de la rebelión tuareg de 1991, en relación con el establecimiento del movimiento yihadista Ansar Eddin el 10 de diciembre y, el 12 de diciembre de 2011, sobre el establecimiento del nuevo grupo yihadista denominado Mouvement unicité et jihad en Afrique de l'Ouest. Este último grupo reivindicó la responsabilidad por el secuestro de tres europeos que prestaban asistencia en un campamento de refugiados saharauí de Tinduf (Argelia) en octubre de 2011. Todos los interlocutores nacionales e internacionales pusieron de relieve la necesidad de un enfoque integral regional para combatir el terrorismo, ante la extrema movilidad que muestra Al-Qaida en el Magreb Islámico en la región.

41. Se capturaron grandes cantidades de explosivos semtex (645 kg) y 445 detonadores en una operación de intercepción de un convoy en el Níger y las autoridades de ese país afirmaron que los explosivos estaban destinados a los campamentos de Al-Qaida en el Magreb Islámico en el norte de Malí. Esta captura podría indicar que los grupos terroristas han adquirido armas y explosivos procedentes de arsenales militares libios.

42. Se informó a representantes de la misión que Boko Haram, que había reivindicado la responsabilidad por el atentado terrorista llevado a cabo contra la Casa de las Naciones Unidas en Abuja el 26 de agosto de 2011, entre otras cosas, también constituía una amenaza para la región. La mayoría de los países de la región expresaron preocupación por su presencia. En el Níger, por ejemplo, la radicalización de los jóvenes generaba particular preocupación en el sur, donde, según los interlocutores, Boko Haram ya difundía ampliamente su ideología y

propaganda y en algunos casos, había logrado que se cerraran escuelas públicas. Se informó también a los representantes de la misión que Boko Haram había establecido vínculos con Al-Qaida en el Magreb Islámico y que algunos de sus miembros procedentes de Nigeria y el Chad se habían adiestrado en campamentos de esta última organización en Malí durante el verano de 2011. Si bien Boko Haram ha concentrado sus actos terroristas en Nigeria, siete de sus miembros fueron arrestados cuando transitaban a través del Níger en dirección a Malí llevando documentación sobre la fabricación de explosivos, folletos de propaganda y los nombres e información de contacto de los miembros de Al-Qaida en el Magreb Islámico con los que supuestamente planeaban reunirse. Mientras que las autoridades nigerianas consideraron que el grupo era una amenaza nacional sin vinculaciones a Al-Qaida en el Magreb Islámico, se ha convertido en un motivo de creciente preocupación para los países de la región.

Delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas

43. La franja del Sáhara y el Sahel es desde hace mucho tiempo una zona donde ha prosperado el tráfico ilícito; sus principales rutas pasan por Malí, Mauritania y el Níger. La reciente aparición de drogas entre los artículos que son objeto de contrabando y tráfico se convertirá en un motivo de mayor preocupación, en vista de su efecto desestabilizador en la región. Se considera también que el aumento del flujo de armas a la región da mayor impulso a las actividades de la delincuencia organizada y de grupos terroristas. Según algunos interlocutores en Malí, ha aumentado el número de delitos, como el robo de autos y ataques armados, en la parte septentrional del país como consecuencia de la disponibilidad de armamento.

Control de fronteras y cooperación

44. El nivel de protección y control de las fronteras varía mucho en la región. Las autoridades del Chad y Mauritania informaron a la misión que habían reforzado sus fronteras incluso antes del inicio de la crisis en Libia y que se había enviado a unidades militares especiales para que hicieran un seguimiento de los movimientos de personas y grupos sospechosos. En Malí y el Níger, las autoridades instaron a la comunidad internacional a proporcionar asistencia para la protección y seguridad de sus fronteras. Muchos funcionarios declararon que no contaban con los medios para hacer un seguimiento de las armas en circulación, ya fuera que estuvieran destinadas a su país o en tránsito por él. Expresaron preocupación por la posibilidad de que hubiera grandes cantidades de armas escondidas en su territorio y solicitaron asistencia para encontrarlas y reunir las. También expresaron preocupación por la falta de protección de sus fronteras por parte de las autoridades libias.

45. Algunas zonas fronterizas, en particular entre el Chad y Libia, estaban sembradas de minas, en particular en la zona de Tibesti en el Chad y no se conocía bien la ubicación de gran parte de ellas, lo que representaba un gran peligro. El Gobierno del Chad ha solicitado asistencia para su remoción.

46. Si bien las cuestiones relativas a la seguridad de las fronteras no figuran expresamente en las estrategias nacionales, se informó a la misión que las autoridades fronterizas de la mayoría de los países carecía de capacidad humana y logística moderna. No existen infraestructuras adecuadas, como equipos para la detección y escáneres, ni se utilizan técnicas de inteligencia para combatir el fraude. Las administraciones de aduanas de la región no cuentan con bases de datos

nacionales de delitos y capturas. A este respecto, se informó a la misión que una gran cantidad de repatriados no llevaba la identificación necesaria. También era difícil controlar los movimientos masivos y frecuentes de trabajadores transfronterizos, quienes a menudo no poseían documentos de identidad.

47. La realización de patrullas coordinadas con homólogos de los países vecinos constituye una buena práctica y se informó a los participantes que había un cierto grado de cooperación en la práctica a este respecto. Sin embargo, estas iniciativas son limitadas. Varios interlocutores mencionaron el principio de persecución continuada, que permite a las fuerzas de seguridad de un país atravesar fronteras internacionales cuando persiguen a sospechosos de terrorismo, pero este no se aplica sistemáticamente ni está siempre basado en acuerdos bilaterales. También sigue siendo esencial enfrentar el sentido de abandono de la población cercana a las zonas fronterizas, que a menudo se considera olvidada y marginada. Las autoridades solicitaron apoyo para establecer puestos de control fronterizo y promover programas de desarrollo en esas regiones, incluida la construcción de escuelas e instalaciones médicas. Además, no hay en las zonas fronterizas instituciones estatales incluidos programas locales de policía de proximidad.

Cooperación policial y judicial

48. En las conversaciones con los servicios de policía y de seguridad de los países visitados, los participantes observaron la falta de coordinación nacional y de mecanismos de enlace para combatir la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo. Sin estos mecanismos, será especialmente difícil para los países de la región enfrentar debidamente los efectos de la crisis en Libia, incluido el incremento de la violencia armada. Además, la misión visitó una unidad de policía judicial especializada en el Níger, cuyo objetivo es prevenir y combatir el terrorismo y que depende del Director General de la Policía Nacional. Este servicio es un muy buen ejemplo para la aplicación de la cooperación policial y judicial en los niveles regional e internacional. También se establecerán departamentos de policía judicial similares en Malí y Mauritania. Estas unidades de policía judicial trabajan bajo la autoridad de fiscales especializados en la lucha contra el terrorismo y pueden colaborar plenamente en los niveles regional e internacional, incluso con la INTERPOL, en el marco del mecanismo de cooperación judicial y estado de derecho.

49. El enfoque judicial de la lucha contra el terrorismo es un elemento fundamental para la cooperación regional e internacional. En sus conversaciones con los funcionarios, la misión recordó las posturas de las Naciones Unidas y la Unión Africana sobre la prevención del terrorismo y la lucha contra este fenómeno, y la necesidad de mantener los más altos niveles de respeto de los principios de derechos humanos y el estado de derecho. Además, se han establecido dos mecanismos de cooperación en cuestiones policiales en África occidental, a saber, el Comité de Jefes de la Policía de África Occidental y el Comité de Jefes de Servicios de Seguridad de la CEDEAO. Sin embargo, solamente pueden formar parte de estos mecanismos los Estados de la CEDEAO, lo que excluye a algunos países de la región del Sahel, entre ellos Argelia, Mauritania y el Chad. Algunos Estados también han firmado acuerdos bilaterales sobre la cooperación policial a fin de combatir la delincuencia organizada transnacional.

50. Diversos funcionarios del Ministerio de Justicia en Malí pusieron de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación judicial en la región. Esto podría lograrse en el marco de la plataforma regional judicial para los países del Sahel que se está preparando entre Burkina Faso, Malí, Mauritania y el Níger con el apoyo de la UNODC. Dado que ya se ha establecido el marco jurídico necesario para la cooperación internacional en cuestiones penales, la asistencia técnica debería centrarse en la generación de capacidad. A ese respecto, la misión observó que la mayor parte de los problemas eran estructurales y estaban profundamente vinculados entre sí, y que debían enfrentarse mediante un enfoque amplio, respetando el equilibrio entre las medidas dirigidas a reforzar la seguridad y las encaminadas a promover el desarrollo socioeconómico.

51. En vista de que los países de la región no extraditan a sus nacionales, la misión observó que los Estados deberían ratificar los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo pertinentes e incorporarlos en su legislación nacional. Además debería aplicarse el principio *aut dedere aut judicare* (extraditar o juzgar), especialmente en relación con los actos de terrorismo y otros delitos graves, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes y, en particular, la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, que dispone que los Estados deben velar por el enjuiciamiento de toda persona acusada de cometer actos de terrorismo. A este respecto, algunos instrumentos de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional bien podrían servir como base para la cooperación judicial.

Respuesta actual y mecanismos existentes

52. Los países de la región del Sahel han establecido diversos programas y mecanismos nacionales y regionales para ocuparse de los problemas de seguridad en la región.

Respuestas nacionales

53. En Malí, la presidencia elaboró en 2011 un programa de emergencia dirigido concretamente a enfrentar la situación en sus regiones septentrionales. El Programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement au nord contiene elementos de seguridad y desarrollo. Tiene por objetivo prestar asistencia concreta en cuanto a la mejora de la infraestructura y los servicios públicos en las zonas empobrecidas y aisladas del norte del país, así como establecer una presencia militar y de seguridad permanente. La iniciativa se aplica con apoyo financiero proporcionado por asociados internacionales. Sin embargo, se ha expresado cierta preocupación acerca de la falta de participación y diálogo con las comunidades locales en su aplicación y problemas vinculados a la gestión. También se expresó preocupación respecto del énfasis del programa en la seguridad.

54. El Ministerio de Seguridad Interior y Protección Civil, en cooperación con el PNUD, también ha adoptado una iniciativa sobre gobernanza democrática de la seguridad y la paz, el Programme pour une gouvernance partagée de la sécurité et de la paix au Mali, cuyo objetivo consiste en ocuparse de la relación entre la seguridad, el desarrollo y la gobernanza en Malí alentando el diálogo con las comunidades locales. La iniciativa se aplica en el marco de la política nacional de seguridad aprobada en octubre 2010. Se ha criticado la falta de coordinación entre los dos programas.

55. Además, el fortalecimiento del diálogo y la participación entre el Gobierno de Malí y las comunidades tuareg en el norte del país, así como entre diferentes comunidades tuareg, se ha considerado esencial para asegurar la aplicación eficaz de los programas nacionales y la restauración efectiva de la autoridad del Estado en el norte.

56. Varios países de la región del Sahel, entre ellos Malí y Mauritania, han elaborado programas nacionales integrados para enfrentar la delincuencia organizada transnacional y combatir el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas. A este respecto, el Gobierno del Níger ha fortalecido varias instituciones, entre ellas la Alta Autoridad para la Consolidación de la Paz, la Comisión Nacional para el control y la reunión de armas ilícitas y la Dependencia de Policía Judicial contra el Terrorismo del Ministerio del Interior. Además, estableció un comité especial en la oficina del Primer Ministro.

Respuestas regionales

57. En el nivel regional, los países del Sahel establecieron una plataforma judicial regional que institucionalizó la cooperación judicial en la región. Actualmente, la plataforma incluye a Burkina Faso, Malí, Mauritania y el Níger, y es posible que otros países del Sahel se sumen a la iniciativa. En el nivel subregional, se están adoptando medidas contra el terrorismo por medio de una estrategia conjunta elaborada por Argelia, Malí, Mauritania y el Níger. Se invitará a Burkina Faso, el Chad y Nigeria a asistir a las próximas reuniones y es posible que estos se sumen a los otros cuatro países en un futuro cercano. En la estrategia se disponen acuerdos y principios de cooperación subregional para la seguridad y el desarrollo en cuatro niveles: consultas políticas periódicas; cooperación militar (Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto); cooperación en materia de inteligencia (Unité de fusion et liaison); y cooperación económica. Las medidas de lucha contra el terrorismo no pueden estar limitadas solamente a las acciones militares; también se necesitan medidas policiales. Los interlocutores nacionales de los países visitados mencionaron la posibilidad de establecer una oficina transahariana para la cooperación regional sobre cuestiones policiales, en el marco del Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto.

58. En 2008, los Ministros de Justicia de África adoptaron el Convenio sobre la asistencia judicial y la extradición en casos de terrorismo en Rabat; este instrumento aún no se ha ratificado. La Unión Africana también está examinando la posibilidad de adoptar una orden de arresto que abarque todo el continente y una convención africana sobre asistencia jurídica recíproca y extradición.

59. La CEDEAO desarrolló un programa de armas pequeñas dirigido a enfrentar la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras en sus Estados miembros. Sin embargo, se lo criticó y consideró ineficaz y está previsto que se elimine gradualmente para fines de 2011. Entretanto, el plan de acción regional de la CEDEAO para enfrentar el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada y el abuso de estupefacientes (2008-2011) constituye un instrumento pertinente, pero se ha aplicado solamente en África occidental.

60. Además, la Unión Africana ha adoptado algunos instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo. Algunos de ellos, ratificados por los países en cuestión, como la Ley tipo para combatir el terrorismo, ofrecen el marco jurídico necesario para mejorar la cooperación existente. Además, el Centro Africano de Estudios e

Investigación sobre el Terrorismo constituye un foro para la interacción, la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros y los mecanismos regionales, por medio de su red de coordinadores nacionales y regionales (sistema continental de alerta temprana en la lucha contra el terrorismo), del que forman parte todos los Estados visitados por la misión. También ha adoptado medidas para proporcionar asistencia técnica a los Estados miembros mediante el desarrollo de conocimientos técnicos especializados en diversos ámbitos de la lucha contra el terrorismo, a través de cursos de capacitación técnica y seminarios. Además, se dijo que la Unión Africana estaba estudiando la posibilidad de adoptar una orden de arresto africana. Se informó también a la misión que la Unión Africana examinaba la posibilidad de aprobar una convención africana sobre asistencia jurídica recíproca y extradición.

61. El Destacamento Integrado de Seguridad (DIS) en el Chad es un órgano de seguridad compuesto por una combinación de personal militar y policial creado inicialmente en el marco de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad con el fin de contribuir a proporcionar seguridad en los ámbitos donde se llevaban a cabo operaciones humanitarias que carecían de estructuras estatales. Este instrumento sigue en funcionamiento por medio de un programa conjunto del PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y necesita un apoyo sostenido de los donantes.

62. La comunidad internacional ha establecido el Foro mundial contra el terrorismo sobre el Sahel (grupo de trabajo sobre el Sahel), presidido conjuntamente por Argelia y el Canadá, y elaborará programas de asistencia técnica para los países de la región.

Recomendaciones

63. A continuación se recomiendan medidas de aplicación inmediata.

a) Nivel nacional

i) Los agentes nacionales, con el apoyo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general, deberían, según proceda:

- Establecer mecanismos adecuados para controlar y asegurar las fronteras nacionales en toda la zona del Sahel, incluso para combatir la transferencia de armas pequeñas y armas ligeras, y aplicar programas nacionales para reunir y destruir las armas pequeñas y armas ligeras ilegales;
- Aplicar todas las medidas jurídicas y administrativas necesarias para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada de conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y los instrumentos regionales, continentales e internacionales pertinentes; estas medidas deberían también respetar las normas internacionales de derechos humanos vigentes y el derecho humanitario y de los refugiados;

ii) La comunidad internacional debería:

- Prestar apoyo a los esfuerzos de los gobiernos por combatir la delincuencia organizada transnacional y los grupos terroristas mediante la prestación de asistencia financiera y para la generación de capacidad (bilateral o

multilateral) a las instituciones pertinentes. Las Naciones Unidas y la Unión Africana deberían determinar ámbitos de cooperación y enviar a sus expertos cuanto antes;

iii) Los agentes nacionales, con el apoyo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general, deberían, según proceda:

- Alentar la elaboración de estrategias nacionales de amplio alcance, incluido el establecimiento de centros de integración, sobre la base de sus coordinadores nacionales, con miras a facilitar el intercambio de información, la coordinación y las operaciones conjuntas;
- Alentar la elaboración y aplicación de estrategias nacionales integrales para combatir el terrorismo, entre otras cosas ocupándose de los problemas de la población y apoyando la aplicación de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (2006);

iv) Todos los Estados deberían:

- Proteger a los migrantes y a los nacionales de terceros países que viven en su territorio o transitan por él.

b) Nivel regional

i) Los mecanismos regionales y subregionales deberían:

- Alentar la cooperación, aplicación y fortalecimiento de las estrategias y mecanismos existentes en materia de seguridad, incluso con las autoridades libias; mejorar la gestión de los efectos de la crisis en Libia mediante la ampliación de la cooperación regional a todos los países de la región afectados;
- Asegurar que la aplicación del principio de persecución continuada se base en acuerdos bilaterales;
- Alentar las medidas operacionales dirigidas a aumentar la eficacia de la lucha contra el terrorismo; reforzar el control en las fronteras, incluso mediante la generación de capacidad y la incorporación de mejoras logísticas;
- Alentar el intercambio de información en materia de seguridad, en particular en relación con la captura de armas, por medio de los sistemas de intercambio de información existentes, como el Centro Africano de Estudios e Investigación sobre el Terrorismo, la Unité de fusion et liaison, la Oficina Nacional Central de la Interpol, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Libia;

ii) La Comisión de la Unión Africana debería:

- Continuar realizando un seguimiento y ayudando a los Estados miembros en la aplicación de las decisiones del Consejo de la Unión Africana y otros órganos y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; y alentar las medidas de colaboración con los órganos y entidades pertinentes de las Naciones Unidas, en particular el Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y la UNODC.

c) Nivel internacional

- i) Las Naciones Unidas y los asociados bilaterales y multilaterales deberían:
- Apoyar las medidas de diálogo y comprensión entre comunidades y religiones de conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (2006) y, más concretamente, la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad;
 - Apoyar las iniciativas dirigidas a reforzar el diálogo e incrementar la capacidad de recuperación de las comunidades locales para resistir y contrarrestar el atractivo del terrorismo y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos terroristas y otros grupos delictivos, entre otras cosas por medio del apoyo al empleo de jóvenes y la educación;
 - Seguir prestando apoyo y reforzando la capacidad de los Estados de proteger sus fronteras y eliminar las minas terrestres;
- ii) El sistema de las Naciones Unidas debería, con carácter urgente:
- Reforzar su capacidad en materia de seguridad y su presencia sobre el terreno;
 - Apoyar y reforzar la iniciativa del grupo de trabajo sobre el Sahel del Foro mundial contra el terrorismo;
 - Alentar el intercambio de información y análisis pertinentes entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, con miras a mejorar la capacidad de alerta temprana;
 - Alentar a los Estados a que incorporen en la legislación nacional las disposiciones de los instrumentos pertinentes de lucha contra el terrorismo y el principio de *aut dedere aut judicare* (extraditar o juzgar), especialmente en relación con actos de terrorismo y otros delitos graves, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes y, en particular, la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se pide a todos los Estados que velen por que se juzgue a todas las personas acusadas de delitos de terrorismo;
- iii) Las Naciones Unidas y la Comisión de la Unión Africana deberían:
- Esforzarse por movilizar recursos para la reintegración socioeconómica de los migrantes africanos a sus comunidades, incluida la organización de una conferencia sobre promesas de contribuciones, e instar a las autoridades libias a que garanticen la seguridad de los trabajadores migrantes africanos.

VII. Observaciones finales

64. Como resultado de la crisis, millones de migrantes económicos, especialmente provenientes del Chad, Malí, Mauritania y el Níger y otros países africanos, se vieron obligados a huir de Libia y volver a las comunidades que habían abandonado en busca de mejores condiciones de vida. De la noche a la mañana, los gobiernos de la región tuvieron que lidiar con los efectos de la crisis en una situación humanitaria, de desarrollo y de seguridad que ya era difícil. Esto incluyó el ingreso de los repatriados, el contrabando de armas provenientes de los arsenales libios, actividades de terrorismo, el desempleo entre los jóvenes, el tráfico de drogas, la

trata de personas y un aumento de la delincuencia. La región también enfrenta una inminente crisis alimentaria y de nutrición.

65. Los líderes de la región acogieron con beneplácito la iniciativa del Secretario General de desplegar la misión y la encomiaron, por considerarla oportuna. El simbolismo de que las Naciones Unidas actuaran junto con la Unión Africana fue apreciado y alentado ampliamente. La misión determinó que existía una notable predisposición, especialmente entre los líderes civiles y políticos de la región, a enfrentar los desafíos existentes. Algunos países han mostrado la voluntad política en el nivel más alto para hacer frente a la situación y han asignado un nivel significativo de recursos a ese fin.

66. La misión observó un gran reconocimiento por los esfuerzos multilaterales sostenidos que realizaban los equipos de las Naciones Unidas en los países visitados. Asimismo, los gobiernos de los países afectados habían adoptado varias iniciativas con el fin de hacer frente a estas cuestiones, como también lo habían hecho el sistema de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la CEDEAO, la OIM y otros interesados bilaterales y multilaterales. Además, hubo fuertes llamamientos a que las Naciones Unidas prestaran apoyo a estas iniciativas en curso y buscaran formas prácticas y concretas de reforzarlas, aumentando la coherencia y la coordinación en todos los niveles. Esto haría que las repercusiones del conflicto en Libia no exacerbaran las tensiones que ya existían y, por lo tanto, agravaran aún más los problemas de seguridad y socioeconómicos de la región.

67. La misión observó que los gobiernos de la región estaban decididos a enfrentar estos desafíos, en particular la amenaza transnacional que planteaban Al-Qaida en el Magreb Islámico, Boko Haram y otros grupos delictivos, así como la proliferación de armas. Sin embargo, era evidente que sus capacidades nacionales y regionales eran diversas y, en general, limitadas. Así, la misión llegó a la conclusión de que los países, en su mayoría, no podían enfrentar por sí solos estas amenazas. Si bien se habían establecido mecanismos regionales para enfrentar estos problemas, estos carecían de los medios necesarios para ejecutar adecuadamente sus tareas. No obstante, los líderes de la región pusieron de relieve que era necesario contar con soluciones nacionales y regionales a los problemas, con el apoyo de la comunidad internacional.

68. La misión llegó a la conclusión de que toda estrategia inmediata o de largo plazo dirigida a mitigar los efectos de la crisis en Libia debería tener en cuenta las causas básicas de los problemas en la región. Así, las principales recomendaciones de la misión pueden agruparse en cuatro categorías:

a) En el nivel nacional: prestar apoyo a la generación de capacidad para las iniciativas en curso adoptadas por los gobiernos con el fin de enfrentar las crisis inmediatas en la región del Sahel; y prestar apoyo a los esfuerzos de los equipos de las Naciones Unidas en los países, especialmente para aumentar la coherencia en la aplicación de programas humanitarios y de desarrollo;

b) En el nivel regional, asegurar que se preste apoyo al fortalecimiento de los mecanismos regionales existentes mediante un proceso de aumento de la capacidad y mejora de la coordinación. Deben revestir prioridad cuestiones como el control de las fronteras y el intercambio de información sobre actividades transfronterizas como el contrabando de armas y sustancias y la trata de personas;

c) En el nivel internacional, las Naciones Unidas deberían encabezar un programa para movilizar un mayor apoyo internacional a la región del Sahel a fin de enfrentar los desafíos de la inseguridad humana y el subdesarrollo. Se determinó que estos son ámbitos en que un programa amplio de participación de la comunidad internacional, incluidos proyectos de efecto rápido, contribuiría a resolver problemas como el desempleo de los jóvenes y cuestiones de corto y largo plazo relativas a la falta de seguridad alimentaria, la nutrición y otras fuentes de vulnerabilidad;

d) Además, se recomendó la adopción de un mecanismo o marco general que reuniera a todos los países afectados en forma coordinada para celebrar debates y encontrar soluciones. Pese a que los países de la región forman parte de organismos distintos (Nigeria y el Níger pertenecen a la CEDEAO, el Chad es miembro de la CEEAC, Mauritania no forma parte de la CEDEAO y Argelia está en la región del Magreb árabe), todos los Estados están dispuestos a trabajar en forma más coordinada. Además, ninguna de las entidades de las Naciones Unidas con presencia en la región, la UNOWA, la OCNUA y la UNSMIL, posee un mandato general que abarque la gran región del Sahel. Sin embargo, es importante que estas formen parte de toda iniciativa sobre el Sahel que se adopte en el futuro.

69. La misión agradece profundamente a todos los gobiernos y líderes de la región, que le brindaron su tiempo y sus perspectivas sobre la aplicación de su mandato. Los miembros agradecen también el apoyo que proporcionaron a todos los participantes el Representante Especial del Secretario General Said Djinnit y los colegas de la CEDEAO, así como los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas en el Chad, Malí, Mauritania, el Níger, y Nigeria. Su generosa y amable asistencia, especialmente en los cuatro Estados del Sahel, contribuyó inmensamente a que la labor de la misión se llevara a cabo sin obstáculos. Los participantes de la misión expresan su gratitud a la Comisión de la CEDEAO.

70. Por último, los miembros de la misión interinstitucional de evaluación agradecen al Secretario General y al Presidente de la Comisión de la Unión Africana por haberles ofrecido la oportunidad de participar en la misión. Instan enérgicamente a los líderes de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO a que, con carácter urgente, encabecen los esfuerzos dirigidos a movilizar el apoyo internacional a la aplicación de las recomendaciones que figuran en este informe.

Anexo I

Lista de participantes

Sam Bassey Ibok, Director Adjunto, División de África II, Departamento de Asuntos Políticos – Jefe de la delegación

Embajador Ki Doulaye Corentin, Jefe de la Oficina de Enlace de la Unión Africana en Yamena

Danilson Lopes da Rosa, Oficial de Asuntos Políticos, División de África II, Departamento de Asuntos Políticos

Kasper Ege, Oficial Adjunto de Asuntos Políticos, Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo

Jean-Philippe Morange, Oficial Jurídico, Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo

Eugenijus Usinskas, Experto en administración de fronteras, Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Brindisi (Italia)

Ely Dieng, Asesor Superior de Políticas, Dependencia de Reforma del Sector de la Seguridad, Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz

Alfred Nabeta, Oficial de Asuntos Humanitarios, División de África II, Sección de Coordinación y Respuesta, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

Rudolfo Jocondo Kazimiro, Jefe de la Oficina Regional, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Dakar

Max Schott, Oficial de Asuntos Humanitarios, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Oficina Regional, Dakar

Jahal Rabesahala de Meritens, Coordinador mundial, Grupo de Trabajo Temático sobre la Recuperación Temprana, Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ginebra

Alexandre Schmidt, Representante Regional para África Occidental y Central, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Dakar

Damine Rey, Experto en prevención del terrorismo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Dakar

Dah Khattar, Coordinador de Programas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nuakchot

Nicolas Guinard, Asesor sobre la reforma del sector de la seguridad, Jefe de la Sección de Reforma del Sector de la Seguridad, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Dakar

Francesc Revuelto-Lanao, Oficial de Asuntos Políticos, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia

Igor Cvetkovski, Experto en recuperación y transición, Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia, Organización Internacional para las Migraciones, Ginebra

Lakhdar Idriss Mounir Lallali, Jefe de la Dependencia de Alerta y Prevención, Centro Africano de Estudios e Investigación sobre el Terrorismo, Argel

Anexo II

Itinerario y lista de interlocutores

Malí (8 a 11 de diciembre de 2011)

Interlocutores nacionales

Presidente de la República de Malí

Primer Ministro

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Finanzas

Ministro de Presupuesto

Ministro de Tierras y Administración Local

Ministro de Seguridad Interior y Protección Civil

Interlocutores internacionales

Representantes del Brasil, China, la India, la Federación de Rusia, Sudáfrica

Representantes de Bélgica, Dinamarca, la Unión Europea, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, España, Suecia

Representantes del Japón, Noruega y Suiza

Representantes de los Estados Unidos de América

Representantes Argelia, Burkina Faso, el Chad, Guinea, Libia, Mauritania, el Níger, el Senegal y Túnez

Equipo de las Naciones Unidas en el país

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), OIM, Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (ONUSIDA), PNUD, Departamento de Seguridad, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sociedad civil

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades del norte de Malí

Níger (12 a 14 de diciembre de 2011)

Interlocutores nacionales

Ministro de Justicia

Ministro del Interior

Secretario General del Ministerio de Planeamiento

Secretario General Adjunto del Ministerio de Defensa

Director General de Documentación y Seguridad Nacional

Vicejefe de Gabinete del Primer Ministro

Representantes de ministerios técnicos

Alta Autoridad para la Consolidación de la Paz

Alta Autoridad para el Control y la Reunión de Armas Ilícitas

Interlocutores internacionales

Representantes de Argelia, el Chad, China, Francia, Malí, Mauritania, los Estados Unidos de América, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Unión Europea

Representantes de Oxfam Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras

Equipo de las Naciones Unidas en el país

FAO, OIM, ONUSIDA, PNUD, Departamento de Seguridad, UNFPA, ACNUR, UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, PMA, OMS

Chad (15 a 17 de diciembre de 2011)

Interlocutores nacionales

Primer Ministro

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro de Derechos Humanos

Ministro de Administración Territorial

Ministro de Seguridad

Comité Interministerial

Interlocutores internacionales

Representantes de Alemania, Francia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América

Equipo de las Naciones Unidas en el país

FAO, OIM, ONUSIDA, PNUD, Departamento de Seguridad, UNFPA, ACNUR, UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, PMA, OMS

Mauritania (18 y 19 de diciembre de 2011)

Interlocutores nacionales

Primer Ministro

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministro del Interior

Ministro de Economía y Desarrollo

Ministro y Comisionado de Derechos Humanos

Presidente del Senado

Presidente de la Asamblea Nacional

Jefe de Estado Mayor del Ejército

Interlocutores internacionales

Representantes de Alemania, la Unión Europea, Francia, Gambia, el Japón, la Federación de Rusia, el Senegal, España y los Estados Unidos de América

Equipo de las Naciones Unidas en el país

FAO, PNUD, Departamento de Seguridad, UNFPA, ACNUR, UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, PMA, OMS

Nigeria (20 de diciembre de 2011)

Interlocutores nacionales

Ministro de Defensa

Interlocutores regionales

Comisionada para el Desarrollo Humano y las Cuestiones de Género, CEDEAO

Comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad, CEDEAO
